



Asamblea General

Distr. general
5 de abril de 2022
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

50º período de sesiones

13 de junio a 8 de julio de 2022

Tema 6 de la agenda

Examen periódico universal

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal*

Zimbabwe

* El anexo se distribuye sin revisión editorial oficial, únicamente en el idioma en que se presentó.



Introducción

1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, establecido de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, celebró su 40º período de sesiones del 24 de enero al 11 de febrero de 2022. El examen de Zimbabwe se llevó a cabo en la quinta sesión, el 26 de enero de 2022. La delegación estuvo encabezada por el Ministro de Justicia y Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, Ziyambi Ziyambi. En su décima sesión, celebrada el 28 de enero de 2022, el Grupo de Trabajo aprobó el informe sobre Zimbabwe.
2. El 12 de enero de 2022, el Consejo de Derechos Humanos eligió al siguiente grupo de relatores (troika) para facilitar el examen de Zimbabwe: Armenia, Luxemburgo y Namibia.
3. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y en el párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo, para el examen de Zimbabwe se publicaron los siguientes documentos:
 - a) Un informe nacional/exposición por escrito de conformidad con el párrafo 15 a)¹;
 - b) Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de conformidad con el párrafo 15 b)²;
 - c) Un resumen preparado por el ACNUDH de conformidad con el párrafo 15 c)³.
4. Por conducto de la troika se transmitió a Zimbabwe una lista de preguntas preparadas de antemano por Alemania, Bélgica, España, los Estados Unidos de América, Liechtenstein, Panamá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia. Esas preguntas pueden consultarse en el sitio web del examen periódico universal.

I. Resumen de las deliberaciones del proceso de examen

A. Exposición del Estado examinado

5. La delegación de Zimbabwe señaló que el informe de mitad de período y el informe nacional contenían información sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del examen anterior que contaron con su apoyo.
6. Se habían ratificado varios tratados regionales e internacionales. En 2020 se había promulgado la Ley de Tratados Internacionales, que establecía un procedimiento uniforme para el examen de los tratados internacionales. Se había avanzado mucho en la armonización de las leyes con la Constitución, pues se había completado el proceso de 176 de las 206 leyes que debían ser objeto de dicha armonización.
7. Se había modificado la Ley de Educación para incorporar disposiciones de derechos humanos en materia de género, discapacidad, salud y equidad para los niños. Se había puesto en marcha la Política Nacional de Discapacidad, y en todas las leyes, políticas y programas se habían incorporado las consideraciones relacionadas con la discapacidad. El proyecto de ley de personas con discapacidad estaba pasando por los trámites correspondientes del proceso legislativo interno.
8. En 2018, se habían cursado invitaciones a seis titulares de mandatos de los procedimientos especiales, tres de los cuales habían visitado Zimbabwe.
9. En 2018 se había puesto en marcha el plan Visión 2030, en el que se trazaba una trayectoria de desarrollo con miras a convertir a Zimbabwe, antes de 2030, en un país de ingreso medio-alto. De conformidad con la Visión 2030, se habían transferido competencias

¹ [A/HRC/WG.6/40/ZWE/1](#).

² [A/HRC/WG.6/40/ZWE/2](#).

³ [A/HRC/WG.6/40/ZWE/3](#).

y responsabilidades a los niveles subnacionales de gobierno competentes. Se había puesto en marcha la Primera Estrategia Nacional de Desarrollo (2021-2025) con el fin de facilitar la recuperación económica y el crecimiento y crear nuevas oportunidades de creación de riqueza, innovación y desarrollo empresarial.

10. Se había aumentado la asignación presupuestaria al sector de la salud hasta el 13 % del presupuesto nacional de 2022. En colaboración con los asociados para el desarrollo, se estaba aplicando una política de agua, saneamiento e higiene con el objetivo de proporcionar a todos instalaciones de saneamiento adecuadas antes de 2030. En 2018 se había puesto en marcha en todo el país un programa nacional de vacunación de niñas y mujeres contra el virus del papiloma humano a fin de combatir el cáncer de cuello uterino.

11. Zimbabwe estaba saliendo de una cuarta ola de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). A través de un programa de vacunación en todo el país, 7,4 millones de personas habían recibido al menos una dosis de la vacuna y alrededor del 34 % de las personas tenían completa la pauta de vacunación. Se estaba aplicando un programa complementario de vacuna de refuerzo.

12. El programa de subvenciones a los derechos de matrícula había seguido apoyando a los alumnos más desfavorecidos de las escuelas primarias y secundarias. Además, se estaban proporcionando compresas higiénicas a las alumnas. A fin de facilitar la enseñanza y el aprendizaje durante la pandemia de COVID-19, se habían introducido plataformas alternativas de aprendizaje.

13. A efectos de aumentar la participación de las mujeres en la política, la vigencia de la cuota de participación femenina en la Asamblea Nacional (60 escaños) se había prorrogado más allá de 2023. Además, la Constitución fijaba en un 30 % la cuota de participación de las mujeres en la administración local. En relación con la participación de los jóvenes en la política, se habían reservado para los jóvenes como mínimo diez escaños en la Asamblea Nacional.

14. En 2021, el Tribunal Constitucional había quedado separado del Tribunal Supremo. Se había designado a 5 magistrados y 4 magistradas para formar parte del Tribunal Constitucional. Además, se había seguido descentralizando los tribunales para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a la justicia en un radio de 15 kilómetros. Se habían creado y puesto en marcha nuevos tribunales en los distritos y en las principales zonas de alta densidad demográfica. Tras la puesta en marcha de la estrategia de lucha contra la corrupción se habían creado tribunales especiales de lucha contra la corrupción.

15. Las condiciones de los centros de detención y reclusión seguían mejorando y en 2021 había entrado en funcionamiento un establecimiento penitenciario de régimen abierto para mujeres delincuentes. Se estaban llevando a cabo inspecciones penitenciarias tanto periódicas como de carácter puntual. Los funcionarios de prisiones recibían capacitación en derechos humanos y rehabilitación de reclusos, entre otros temas.

16. Una vez que se promulgaran, el proyecto de ley de modificación de la ley del niño, el proyecto de ley de matrimonios y el proyecto de ley de justicia juvenil, que se encontraban en una fase avanzada, reforzarían el marco legislativo para la promoción y protección de los derechos del niño, entre otras formas mediante la penalización del matrimonio infantil. A fin de garantizar la protección de los niños en Internet, se habían adoptado medidas como la creación del Equipo de Tareas de Zimbabwe de Protección del Niño en Internet. La recientemente promulgada Ley de Ciberseguridad y Protección de Datos preveía mecanismos y servicios de protección para los niños.

17. Se había llegado a un acuerdo con los representantes de los antiguos agricultores sobre la cifra global que debía pagárseles en concepto de indemnización por las mejoras que habían realizado en las explotaciones agrícolas antes de que debieran cederlas para fines de reasentamiento.

18. La pandemia de COVID-19 había afectado a todos los sectores de la economía. Como consecuencia directa de la pandemia, se habían perdido vidas y puestos de trabajo y se había generalizado la inseguridad alimentaria. A fin de mitigar estas consecuencias, se había implantado un sistema de vales mensuales para proporcionar artículos de primera necesidad a los miembros vulnerables de la sociedad. A la sazón, se estaba llevando a cabo una revisión

de todas las prestaciones de seguridad social. Las medidas de confinamiento se revisaban cada quincena y se ajustaban en función de los datos resultantes del seguimiento diario de la pandemia.

19. Los efectos del cambio climático eran cada vez más evidentes. El aumento de las sequías, los ciclones, las inundaciones, las tempestades de granizo y las olas de calor repercutía negativamente en los resultados económicos y la seguridad alimentaria. Se estaban llevando a cabo evaluaciones de los cultivos y el ganado para garantizar una distribución equitativa y justa de la ayuda alimentaria a los hogares vulnerables a través del Programa de Movilización de Cereales.

20. A fin de alcanzar el ambicioso objetivo de lograr una “economía verde” antes de 2030, el Gobierno estaba procurando mejorar los conocimientos sobre el clima, mejorar la capacidad de adaptación y reducir la excesiva dependencia de los sectores sensibles a los efectos del clima. Se estaban incorporando en las políticas nacionales los enfoques de adaptación al cambio climático y resiliencia frente a este. Se estaba elaborando una estrategia de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

21. Las medidas coercitivas unilaterales ilegales impuestas por algunos países occidentales habían seguido poniendo en peligro el disfrute de los derechos socioeconómicos de la población de Zimbabwe. El Gobierno mantenía la esperanza de que el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, que se publicaría en relación con su visita a Zimbabwe, suscitara la reflexión de estos países occidentales sobre la conveniencia de continuar con la imposición de medidas punitivas. Zimbabwe seguía en deuda con la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo por su histórica decisión de declarar el 25 de octubre como día en el que sus Estados miembros pedirían colectivamente el levantamiento de las sanciones.

22. En respuesta a las preguntas preparadas de antemano, la delegación señaló que, por lo que se refería a la independencia judicial, esta se respetaba y protegía. La Constitución establecía una clara separación de facultades entre los tres poderes del Estado. También disponía la creación de un Consejo Superior de la Magistratura independiente. La contratación y el nombramiento de los jueces se basaban en el mérito y se llevaban a cabo teniendo en cuenta las entrevistas públicas del Consejo con los candidatos. No tenía ningún fundamento la afirmación de que el Gobierno había ejercido influencia sobre los tribunales para debilitar a los partidos políticos de la oposición permitiendo la destitución de diputados y concejales elegidos por esta. El proceso de destitución de diputados y concejales había sido iniciado por los partidos de la oposición cuando acudieron a los tribunales para que resolvieran sus controversias internas.

23. La policía había seguido proporcionando informes quincenales sobre la continuación de la investigación de la desaparición de Itai Dzamara, en cumplimiento de una orden de 2018 del Tribunal Superior. La policía también estaba investigando las desapariciones de Patrick Nabanyama y Paul Chizuze.

24. Las modificaciones propuestas a la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas tenían por objeto subsanar las deficiencias en los mecanismos de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo que se habían detectado en el informe de evaluación mutua de 2016 sobre Zimbabwe, que había dado lugar a la inclusión de este país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera. Las modificaciones propuestas se limitaban a garantizar una mayor transparencia y coherencia en el registro y la regulación de las organizaciones voluntarias privadas, y eran el resultado de una amplia investigación y de consultas con múltiples partes interesadas.

25. Las manifestaciones de agosto de 2018 y enero de 2019 habían sido extremadamente violentas y constituían la antítesis de actos pacíficos de protesta pública. Se estaban investigando las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad que habían provocado la muerte de civiles. Además, el Presidente había nombrado una comisión internacional de investigación integrada por siete miembros, presidida por el ex Presidente de Sudáfrica Kgalema Motlanthe, para investigar los sucesos de agosto de 2018. Dicha comisión había presentado un informe en el que hacía una serie de

recomendaciones, la mayoría de las cuales se habían aplicado o estaban en proceso de aplicación.

26. También había otras investigaciones que, debido a su complejidad, aún no habían concluido. Una de ellas estaba relacionada con el caso del intento de asesinato del Presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, antes de las elecciones.

27. Zimbabwe había aplicado una moratoria *de facto* sobre la pena de muerte durante los últimos 16 años, y la abolición de dicha pena estaba siendo sometida a procesos de consulta interna. A fin de luchar contra la violencia de género, se habían seguido fortaleciendo los marcos legislativos y de políticas. El retraso en la celebración de las elecciones parciales se atribuía a los efectos de la pandemia de COVID-19, sumados a la imposición de sanciones ilegales.

28. Los sucesivos años de sequía generalizada y las persistentes y costosas secuelas del ciclón Idai, agravadas por las exigencias de la pandemia del COVID-19, habían ejercido una presión sin precedentes sobre el presupuesto nacional, el cual, debido a la imposición de sanciones, ya estaba sometido a una fuerte presión por la falta de acceso a una financiación internacional asequible en condiciones favorables. Los limitados recursos habían llevado al Gobierno a dar prioridad a la seguridad alimentaria y a la lucha contra la pandemia de COVID-19. La seguridad alimentaria había mejorado gracias a una cosecha abundante en 2021 que, según se preveía, se repetiría en 2022. También se había avanzado razonablemente en la contención del virus de la COVID-19. En consecuencia, las elecciones parciales para todas las circunscripciones vacantes se celebrarían el 26 de marzo de 2022.

29. Se habían introducido medidas para garantizar que las personas detenidas fueran puestas en libertad a menos que hubiera razones imperiosas para no hacerlo. Los retrasos en la resolución de las causas judiciales, que en un principio se habían atribuido a la imposibilidad de que los tribunales se reunieran debido a los sucesivos períodos de confinamiento relacionados con la COVID-19, se habían subsanado finalmente mediante la celebración de actuaciones judiciales en línea.

30. En relación con la presunta desaparición de tres mujeres que eran miembros de partidos políticos de la oposición, la delegación, en respuesta a una pregunta presentada con antelación, afirmó que no se trataba de casos de presunta desaparición forzada sino de presunto secuestro. La policía había señalado que las acusaciones eran falsas y que los secuestros habían sido un montaje para empañar la imagen del Gobierno. Las mujeres habían sido acusadas y puestas en libertad. Habían empleado tácticas dilatorias para eludir el juicio. Una de ellas se había fugado a Europa, y se había emitido una orden de detención en su contra.

31. En el presupuesto nacional de 2022, las asignaciones para la Comisión Nacional para la Paz y la Reconciliación y la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe habían aumentado un 326 % y un 273 %, respectivamente, con respecto al año anterior.

32. El proyecto de ley por el que se modificaba la Ley contra la Trata de Personas estaba pendiente de su tramitación parlamentaria.

B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado

33. En el diálogo interactivo, formularon declaraciones 95 delegaciones. Las recomendaciones formuladas durante el diálogo figuran en la sección II del presente informe.

34. Egipto observó la puesta en marcha de la Visión 2030 y de la Primera Estrategia Nacional de Desarrollo (2021-2025), que sentaban las bases para el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos.

35. Eswatini destacó la labor encaminada a promover los derechos de las personas con discapacidad y a garantizar que los niños recibieran educación durante la pandemia de COVID-19.

36. Etiopía se refirió a las actividades realizadas para adoptar políticas destinadas a elevar el nivel de vida.

37. Fiji mencionó las actividades realizadas para reforzar las políticas y marcos institucionales de lucha contra la violencia de género.
38. Finlandia alentó a Zimbabwe a que siguiera aumentando la representación de la mujer en puestos clave del gobierno.
39. Francia señaló que la situación de los derechos humanos en Zimbabwe seguía siendo preocupante. Celebró las medidas adoptadas para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres.
40. El Gabón acogió con satisfacción la modificación de la Ley de Educación y aplaudió el suministro de compresas higiénicas a las alumnas para satisfacer las necesidades de higiene menstrual.
41. Georgia valoró positivamente el aumento de la asignación del presupuesto nacional para la salud pública y la labor encaminada a lograr la igualdad de género.
42. Alemania expresó preocupación por las detenciones arbitrarias y el enjuiciamiento de miembros de partidos políticos de la oposición y activistas de la sociedad civil.
43. Ghana destacó la adopción de la estrategia nacional quinquenal de lucha contra la corrupción, la Estrategia Nacional de Salud para Zimbabwe (2016-2020) y la sólida estrategia de respuesta al VIH.
44. Islandia celebró la presentación por Zimbabwe de su informe nacional.
45. La India destacó la aplicación de la Visión 2030, la Primera Estrategia Nacional de Desarrollo (2021-2025), la Estrategia Nacional de Salud para Zimbabwe (2016-2020) y las medidas para la protección de los niños en Internet.
46. Indonesia observó que Zimbabwe había garantizado la educación como derecho humano mediante su modificación de la Ley de Educación.
47. La República Islámica del Irán expresó preocupación por la vigencia de las sanciones económicas unilaterales contra Zimbabwe, que habían tenido efectos negativos en el disfrute de los derechos socioeconómicos, especialmente durante la pandemia de COVID-19.
48. El Iraq celebró la armonización de la legislación con la Constitución y la labor realizada para garantizar el acceso universal a una educación de calidad.
49. Irlanda expresó preocupación por la reducción del espacio de la sociedad civil y por la desigualdad entre los géneros, y observó la prevalencia de la violencia sexual y de género y las prácticas nocivas.
50. Italia destacó las gestiones encaminadas a aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y acogió con satisfacción la Política Nacional de Discapacidad.
51. El Japón valoró positivamente las modificaciones introducidas en la Ley de Educación, que reconocían la situación matrimonial y el embarazo como motivos prohibidos de discriminación en la educación.
52. Kenya acogió con satisfacción las medidas adoptadas para proteger los derechos humanos y aplaudió las gestiones encaminadas a promulgar el proyecto de ley de la comisión independiente de denuncias de Zimbabwe.
53. Letonia agradeció a Zimbabwe la presentación de su informe nacional.
54. Libia destacó las medidas adoptadas para garantizar la participación política, en particular las enmiendas legislativas introducidas.
55. Luxemburgo agradeció a Zimbabwe su informe nacional.
56. Malawi destacó las medidas adoptadas para proteger los derechos humanos.
57. Malasia señaló la elaboración de varios marcos legislativos y de política desde el anterior examen.
58. Maldivas observó la promulgación de la modificación de la Ley de Educación y el establecimiento de un programa de agricultura climáticamente inteligente.

59. Malí elogió a Zimbabwe por su cooperación con los mecanismos de derechos humanos y señaló los progresos realizados en la aplicación del programa de alimentación escolar con productos locales.
60. Las Islas Marshall destacaron el ambicioso objetivo de lograr una economía verde antes de 2030, así como la incorporación de la adaptación al cambio climático en las políticas.
61. Mauritania observó la puesta en marcha de la iniciativa Visión 2030 y de la Primera Estrategia Nacional de Desarrollo (2021-2025).
62. Mauricio se refirió a las iniciativas para proporcionar subvenciones a las escuelas primarias y secundarias más desfavorecidas, así como compresas higiénicas a las alumnas.
63. La delegación de Zimbabwe observó que se había reconocido la amenaza que planteaba el cambio climático para el desarrollo socioeconómico, y que las cuestiones relacionadas con el cambio climático y el género se habían incorporado en las políticas y estrategias nacionales. En 2018, se había adoptado una política climática nacional apoyada por una estrategia nacional de intervención en relación con el cambio climático. Se estaba trabajando en la elaboración de un plan nacional de adaptación al cambio climático.
64. La respuesta a la violencia de género se había llevado a cabo mediante un enfoque multisectorial bien coordinado, concebido para garantizar que las supervivientes tuvieran acceso a una gran variedad de servicios de apoyo, y a través de tribunales especializados en violencia sexual y doméstica. A través de la Política Nacional de Discapacidad puesta en marcha en 2021, el Gobierno había procurado mejorar la protección contra la discriminación de las personas con discapacidad. Se había previsto que el proyecto de ley de personas con discapacidad se presentaría para su promulgación durante el actual período de sesiones del Parlamento.
65. Aunque no se había ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, existía una legislación amplia que garantizaba recursos internos adecuados en relación con la tortura.
66. Las modificaciones propuestas a la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas atendían a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera.
67. Las medidas coercitivas unilaterales que se habían impuesto a Zimbabwe durante alrededor de 20 años no fueron selectivas e infligieron daños colaterales que afectaron a muchas más personas y entidades de las que se había previsto afectar, aunque quienes impusieron las sanciones se resistían a reconocerlo. Todos los sectores del desarrollo socioeconómico se habían visto afectados negativamente por las medidas coercitivas unilaterales, sobre todo por los efectos de haber sido privados de acceso a las fuentes de financiación internacional. Las medidas eran injustas y estaban infligiendo un tremendo daño a la economía y dificultando la capacidad del país para alcanzar sus objetivos de desarrollo.
68. México celebró la puesta en marcha de la Política Nacional de Discapacidad y la promulgación de la ley que regulaba la ratificación de los tratados.
69. Montenegro observó que los casos de violencia sexual y de género no se denunciaban lo suficiente y su índice de enjuiciamiento era reducido, y pidió que se sensibilizara sobre esta cuestión.
70. Mozambique destacó los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del examen anterior, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los asociados internacionales.
71. Namibia observó los efectos negativos que las medidas coercitivas unilaterales tenían sobre los derechos socioeconómicos.
72. Nepal se refirió a los efectos del cambio climático en la agricultura, la silvicultura y los recursos hídricos.
73. Los Países Bajos expresaron preocupación por las modificaciones legislativas que reducirían el espacio cívico.
74. El Níger destacó la labor encaminada a combatir la corrupción en las instituciones públicas.

75. Nigeria observó la continua cooperación de Zimbabwe con los mecanismos de derechos humanos y la puesta en marcha de la Primera Estrategia Nacional de Desarrollo (2021-2025).
76. Noruega formuló recomendaciones.
77. El Pakistán valoró positivamente las modificaciones de la Ley de Codificación y Reforma del Código Penal, el fortalecimiento de las leyes sobre violencia doméstica y el desarrollo de mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria.
78. Filipinas se refirió a las medidas adoptadas para promover los derechos de las personas con discapacidad, y al aumento de la inversión en el sector de la salud.
79. Portugal mencionó las campañas de sensibilización sobre la violencia doméstica y de género y el establecimiento de un procedimiento uniforme para el examen de los tratados.
80. La Federación de Rusia tomó nota positivamente de la penalización de los actos constitutivos de tortura.
81. El Senegal señaló la promulgación de varias leyes que incorporaban en la legislación nacional las convenciones de derechos humanos ratificadas.
82. Serbia encomió a Zimbabwe por las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del examen anterior.
83. Sierra Leona destacó la promulgación de la Ley de Tratados Internacionales con miras a la ratificación efectiva de los tratados internacionales.
84. Eslovenia expresó preocupación por el hecho de que un tercio de las niñas menores de 18 años estuvieran casadas, y también por que se infligieran castigos corporales a los alumnos con fines disciplinarios.
85. Sudáfrica celebró los progresos realizados en la armonización de las leyes con la Constitución y también la ratificación de la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza.
86. Sudán del Sur encomió a Zimbabwe por su colaboración positiva con los mecanismos de derechos humanos.
87. España valoró positivamente la ratificación de la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, pero señaló la falta de avances sustantivos en la protección de los derechos y libertades fundamentales.
88. Sri Lanka observó los problemas que se enfrentaban debido a la imposición de medidas coercitivas unilaterales y su repercusión en el disfrute de los derechos socioeconómicos, y agradeció la labor realizada para promover los derechos humanos.
89. El Estado de Palestina formuló recomendaciones.
90. Suecia expresó preocupación por la impunidad, las recurrentes violaciones de derechos humanos contra representantes de la sociedad civil, miembros de partidos políticos de la oposición y trabajadores de los medios de comunicación, y la falta de un poder judicial independiente.
91. Suiza celebró, entre otras cosas, las reiteradas declaraciones del Presidente de Zimbabwe de que se aboliría la pena de muerte, y la disposición para hacer frente a la violencia del pasado.
92. La República Árabe Siria apreció las iniciativas adoptadas para hacer realidad las aspiraciones colectivas de los zimbabuenses, en particular mediante la adopción de la Primera Estrategia Nacional de Desarrollo (2021-2025).
93. Tailandia acogió con satisfacción los progresos realizados desde el examen anterior, por ejemplo en el ámbito de los derechos de la mujer, pero señaló que la prevalencia del VIH seguía siendo elevada.
94. Timor-Leste apreció la inclusión de un componente de género en la política nacional de cambio climático.

95. El Togo celebró las gestiones realizadas para aplicar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
96. Túnez apreció las gestiones realizadas para promover los derechos humanos y la armonización de las leyes con la Constitución.
97. Turquía reconoció la labor realizada en los ámbitos de la educación, el empoderamiento económico de las mujeres y la administración de justicia.
98. Ucrania lamentó que no se hubiera hecho lo suficiente para garantizar el libre ejercicio de las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación.
99. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte expresó preocupación por las restricciones a la libertad de reunión, por el acoso a periodistas, miembros de la oposición y agentes de la sociedad civil y por las modificaciones constitucionales con las que se corría el riesgo de reducir la independencia judicial.
100. La República Unida de Tanzania instó a Zimbabwe a que garantizara que las personas en situación de vulnerabilidad tuvieran acceso a los alimentos y a que mejorara las medidas para combatir la malnutrición entre los niños.
101. Los Estados Unidos de América expresaron preocupación por el hecho de que la normativa sobre la COVID-19 se hubiera utilizado para justificar restricciones al derecho de voto de los ciudadanos y a sus derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.
102. El Uruguay acogió con satisfacción la labor realizada desde el examen anterior en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo para mejorar el registro de los nacimientos.
103. En relación con la promoción de la libertad de los medios de comunicación, la delegación de Zimbabwe afirmó que, en 2020 y 2021, se habían concedido 14 licencias de radiodifusión. Había una multiplicidad de periódicos independientes y una plétora de publicaciones independientes disponibles en línea, por ejemplo en las plataformas de medios sociales. Ningún periodista había sido detenido por ejercer el periodismo.
104. Zimbabwe estaba decidido a ratificar la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, y estaba trabajando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones para determinar en qué medida la apatridia era un problema para el país.
105. La capacidad de expedición de partidas de nacimiento se había reducido considerablemente debido a la disminución de personal en el departamento de registro resultante de las medidas de confinamiento por la COVID-19, pero se reforzaría una vez que se relajaran las medidas. Se incrementaría la expedición de partidas de nacimiento, entre otras formas desplegando personal en todo el país para la realización de registros móviles.
106. El derecho de voto y el derecho a la libertad de reunión se habían visto restringidos por la pandemia de COVID-19 y como resultado de la aplicación de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los expertos sanitarios zimbabuenses. Ahora se criticaba al Gobierno por restringir la entrada a los edificios públicos permitiéndola solo a las personas vacunadas.
107. La República Bolivariana de Venezuela observó los progresos realizados en cuanto a mejorar el acceso a la educación, los servicios de salud y la alimentación, a pesar de la imposición de medidas coercitivas unilaterales ilegales.
108. Viet Nam destacó la labor realizada para proteger los derechos de las mujeres, incluidas las medidas para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres.
109. El Yemen observó, entre otras cosas, la ratificación de varias convenciones internacionales y regionales y la adopción de la Primera Estrategia Nacional de Desarrollo (2021-2025).
110. Zambia señaló la ratificación de tratados y su incorporación a la legislación nacional desde el examen anterior, así como la creación y el fortalecimiento de instituciones independientes.

111. Argelia destacó el considerable progreso en la armonización de las leyes con la Constitución.
112. Angola alentó a Zimbabwe a que mejorara las condiciones de trabajo del personal de la institución de derechos humanos.
113. La Argentina señaló las gestiones realizadas para aplicar las recomendaciones formuladas en el examen anterior.
114. Armenia acogió con satisfacción las medidas adoptadas para prohibir la tortura y observó los avances en la lucha contra la trata de personas.
115. Australia celebró la postura sobre la pena de muerte mantenida por Zimbabwe, que había seguido siendo abolicionista en la práctica.
116. Azerbaiyán observó que Zimbabwe había puesto en marcha programas para promover las normas de derechos humanos en el país.
117. Bangladesh destacó las dificultades a las que se enfrentaba Zimbabwe, entre otras cosas en los ámbitos del cambio climático, la pandemia de COVID-19 y el VIH.
118. Belarús señaló las medidas que se habían adoptado para mejorar las leyes, fortalecer las instituciones jurídicas y garantizar los derechos socioeconómicos de los ciudadanos en el contexto de las sanciones unilaterales ilegales.
119. Bélgica observó que había margen para mejorar en la protección de los derechos humanos, a pesar de las medidas adoptadas desde el examen anterior.
120. El Brasil alentó a Zimbabwe a utilizar herramientas para promover la educación inclusiva, en particular para las mujeres y las niñas.
121. Burkina Faso alentó a Zimbabwe a que prosiguiera su labor para acabar con la violencia de género, que había aumentado durante la pandemia de COVID-19.
122. Burundi acogió con satisfacción las medidas legislativas para mejorar los servicios educativos y sanitarios, prohibir el matrimonio precoz y combatir la explotación sexual de los niños.
123. Cabo Verde afirmó que debía prestarse especial atención a la elaboración de una ley de igualdad de género y a la marginación de las mujeres.
124. El Canadá instó a Zimbabwe a que procurara la plena armonización de sus leyes con la Constitución y garantizara la aplicación justa y equitativa de sus disposiciones.
125. El Chad señaló las medidas adoptadas, como la revisión de las leyes y la aplicación de políticas para mejorar la salud pública, entre otras cosas.
126. Chile observó que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, relativo al logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, era prioritario en la agenda para una transformación socioeconómica sostenible.
127. China destacó los logros en materia de desarrollo económico y social, en la lucha contra la COVID-19, en los ámbitos de la educación y la sanidad y en la protección de los derechos de los grupos vulnerables.
128. Costa Rica formuló recomendaciones.
129. Côte d'Ivoire formuló recomendaciones.
130. Cuba observó las estrategias empleadas por Zimbabwe para prevenir y combatir el VIH y el sida.
131. Chipre destacó los progresos realizados desde el examen anterior, como la adopción de leyes para combatir la violencia de género y sobre la discapacidad.
132. Chequia formuló recomendaciones.
133. La República Popular Democrática de Corea señaló el fortalecimiento del marco institucional de derechos humanos y las medidas adoptadas para dar efectividad a los derechos de los niños, las mujeres y las personas con discapacidad.

134. La República Democrática del Congo destacó las reformas legislativas realizadas para ampliar el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación.

135. Dinamarca se refirió a la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura, que estaba dispuesta a ayudar a Zimbabwe a avanzar en la ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

136. Djibouti observó el proceso inclusivo que había prevalecido en la elaboración del informe nacional y la cooperación de Zimbabwe con los órganos de las Naciones Unidas.

137. Botswana señaló las gestiones realizadas para ratificar tratados e incorporarlos a la legislación nacional, así como los créditos presupuestarios asignados al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.

138. La delegación de Zimbabwe afirmó que existían leyes adecuadas para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos, incluidos los defensores de los derechos humanos. Al igual que los demás ciudadanos, los defensores de los derechos humanos debían respetar la ley. Sin embargo, el pleno disfrute de ciertos derechos se había visto limitado por las medidas adoptadas para contener la pandemia de COVID-19. El Gobierno había actuado con diligencia para prevenir, investigar y castigar toda vulneración cometida contra los defensores de los derechos humanos.

II. Conclusiones y/o recomendaciones

139. Las recomendaciones que figuran a continuación, formuladas durante el diálogo interactivo, han sido examinadas por Zimbabwe y cuentan con su apoyo:

139.1 Considerar la posibilidad de adoptar medidas para mejorar la presentación de informes a los órganos de tratados de derechos humanos (Belarús);

139.2 Continuar su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, en particular los procedimientos especiales (Pakistán);

139.3 Proseguir sus gestiones encaminadas a cumplir sus obligaciones internacionales mediante la elaboración y aplicación de nuevos planes y programas nacionales integrales (República Popular Democrática de Corea);

139.4 Aprobar el proyecto de ley de matrimonios y el proyecto de modificación de la ley del niño, en los que se penaliza el matrimonio infantil (Irlanda);

139.5 Acelerar la aprobación del proyecto de ley de matrimonios y hacer un seguimiento de su difusión al público en general (Etiopía);

139.6 Aprobar leyes en materia de género que castiguen la violencia contra las mujeres, así como la discriminación interseccional contra ellas (México);

139.7 Adoptar medidas legislativas concretas e inmediatas para consagrar los principios de la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza en las leyes nacionales con el fin de garantizar unas elecciones libres, creíbles, transparentes y limpias, en consonancia con la meta 16.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Suiza);

139.8 Continuar las gestiones encaminadas a incorporar en el marco jurídico nacional las normas internacionales de derechos humanos de los instrumentos en las que es parte (Túnez);

139.9 Seguir fortaleciendo la Ley contra la Trata de Personas (Turquía);

139.10 Armonizar las leyes pertinentes con la Convención sobre los Derechos del Niño (Ucrania);

139.11 Armonizar la Ley de Matrimonio con la Constitución de modo que se tipifiquen como delito los matrimonios infantiles, precoces y forzados (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);

- 139.12 Proseguir la labor nacional encaminada a armonizar las leyes nacionales con la Constitución (Argelia);
- 139.13 Completar la elaboración y aprobación del proyecto de ley relativo a las personas con discapacidad (Gabón);
- 139.14 Garantizar la aprobación del proyecto de ley relativo al matrimonio que fija la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años (Gabón);
- 139.15 Incorporar en su legislación nacional las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que es parte (Bangladesh);
- 139.16 Acelerar el proceso de armonización de la legislación nacional con las normas y requisitos jurídicos de la Constitución de Zimbabwe, especialmente la Ley Electoral, la Ley de Codificación y Reforma del Código Penal y la Ley de Matrimonio (Alemania);
- 139.17 Considerar la posibilidad de establecer la institución nacional de derechos humanos, a saber, la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) y garantizar su independencia (India);
- 139.18 Fortalecer la independencia de la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe (Timor-Leste);
- 139.19 Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe sea plenamente independiente, de conformidad con los Principios de París (Uruguay);
- 139.20 Realizar las gestiones necesarias para garantizar la independencia de la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe (Chile);
- 139.21 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento y la plena independencia de la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe, de conformidad con los Principios de París (Djibouti);
- 139.22 Velar por que se protejan, en la legislación y en la práctica, los derechos de los grupos vulnerables de la población, en particular las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las personas de edad y las minorías étnicas (Federación de Rusia);
- 139.23 Seguir procurando movilizar recursos y apoyo técnico para mejorar su capacidad de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y lograr el desarrollo social y económico (República Árabe Siria);
- 139.24 Seguir adoptando medidas para proteger a los niños en Internet mediante el establecimiento del Equipo de Tareas de Zimbabwe de Protección del Niño en Internet, y de las políticas y disposiciones pertinentes (Turquía);
- 139.25 Seguir procurando movilizar recursos y apoyo técnico encaminados a mejorar su capacidad de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y lograr el desarrollo social y económico (Yemen);
- 139.26 Adoptar nuevas medidas para combatir la corrupción mediante programas de formación y sensibilización sobre los costes económicos y sociales de la corrupción (Indonesia);
- 139.27 Seguir formulando medidas basadas en la decisión del Gobierno de impartir formación continua a los funcionarios públicos en materia de derechos humanos para mejorar su capacidad de dar efectividad a los derechos humanos y respetar el estado de derecho (Sudán del Sur);
- 139.28 Garantizar que las leyes y prácticas consuetudinarias se ajusten a la Constitución (Zambia);

139.29 Velar por que las leyes y prácticas consuetudinarias se ajusten a la Constitución y cumplan las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Burkina Faso);

139.30 Intensificar sus gestiones para garantizar una aplicación más eficaz de las políticas y leyes destinadas a luchar contra la discriminación y la marginación de las mujeres (Ghana);

139.31 Adoptar nuevas medidas para garantizar los derechos de la mujer, entre otras formas eliminando las disposiciones discriminatorias por razón de género en materia de matrimonio y derechos de propiedad (Japón);

139.32 Proseguir las gestiones para combatir todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, hacer frente al fenómeno de la violencia doméstica y empoderar a las mujeres e integrarlas en la vida económica (Libia);

139.33 Intensificar la labor encaminada a eliminar los estereotipos de género discriminatorios, las prácticas nocivas y la violencia de género (Nepal);

139.34 Adoptar nuevas medidas para hacer frente a la discriminación contra la mujer, incluida la discriminación directa e indirecta en las esferas pública y privada (Timor-Leste);

139.35 Proseguir la labor realizada para promover la igualdad de género y combatir todas las formas de discriminación contra la mujer, mejorar la protección del niño y eliminar el trabajo infantil (Túnez);

139.36 Proseguir las gestiones, por ejemplo fortaleciendo las medidas de política, encaminadas a mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (Bangladesh);

139.37 Proseguir las iniciativas encaminadas a aplicar los planes estratégicos de recuperación económica y crecimiento a fin de mejorar las oportunidades para todos (Kenya);

139.38 Intensificar las actividades para movilizar recursos y solicitar el apoyo internacional necesario para mejorar el desarrollo socioeconómico de su población (Nigeria);

139.39 Seguir adoptando medidas encaminadas a la aplicación eficaz de la Primera Estrategia Nacional de Desarrollo (2021-2025) (Pakistán);

139.40 Seguir aplicando la Visión 2030 y la Primera Estrategia Nacional de Desarrollo (2021-2025) a fin de mejorar el bienestar de la población (República Unida de Tanzania);

139.41 Proseguir su labor para promover el desarrollo económico y social sostenible a fin de facilitar el disfrute de los derechos humanos por su población (Viet Nam);

139.42 Continuar sus gestiones para promover el desarrollo económico y social sostenible y mejorar constantemente el nivel de vida en el país (Azerbaián);

139.43 Seguir aplicando la estrategia nacional de desarrollo y promoviendo el desarrollo económico y social sostenible (China);

139.44 Incorporar en la Primera Estrategia Nacional de Desarrollo (2021-2025) la respuesta a los efectos socioeconómicos y sanitarios de la COVID-19, como cuestión transversal (Cuba);

139.45 Superar los efectos de la pandemia de COVID-19 para seguir protegiendo los derechos de los grupos vulnerables (China);

139.46 Continuar sus gestiones para contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales a fin de eliminar los efectos negativos de estas medidas ilegales sobre los derechos humanos de la población de Zimbabwe (República Islámica del Irán);

139.47 Colaborar con los organismos regionales, como la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, para asegurar el levantamiento de las sanciones impuestas al país, que han tenido efectos negativos en su desarrollo económico (Malawi);

139.48 Vigilar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional (República Árabe Siria);

139.49 Informar a los mecanismos internacionales de derechos humanos sobre los efectos de las medidas coercitivas unilaterales en los sectores humanitarios (República Árabe Siria);

139.50 Garantizar que las personas afectadas por los desastres naturales tengan acceso a alimentación, vivienda y atención sanitaria adecuadas y a otros servicios básicos y esenciales (Maldivas);

139.51 Considerar la posibilidad de crear mayor conciencia sobre la capacidad de adaptación, el cambio climático y la excesiva dependencia de los sectores sensibles a los efectos del clima, como elementos esenciales para reducir la vulnerabilidad del país ante el cambio climático (Etiopía);

139.52 Proseguir la labor encaminada a mitigar los efectos del cambio climático, como el mayor número de sequías, ciclones e inundaciones, que repercuten negativamente en el disfrute de los derechos humanos de la población (Mozambique);

139.53 Seguir adoptando medidas eficaces para mitigar los efectos negativos del cambio climático (Nepal);

139.54 Solicitar asistencia internacional para mitigar los efectos adversos del cambio climático en la economía y la agricultura (Pakistán);

139.55 Informar sobre las medidas adoptadas para prevenir y mitigar los efectos negativos del cambio climático y la degradación ambiental, en particular en relación con la seguridad hídrica y alimentaria (Fiji);

139.56 Intensificar las gestiones encaminadas a garantizar un enfoque con perspectiva de género e inclusivo desde el punto de vista de la discapacidad en la elaboración y aplicación de las políticas de cambio climático y reducción del riesgo de desastres (Fiji);

139.57 Proseguir sus actividades para mitigar los efectos negativos del cambio climático y la degradación ambiental, en particular en relación con la seguridad hídrica y alimentaria (Estado de Palestina);

139.58 Adoptar medidas adicionales para prevenir todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, incluidas las prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, precoz y forzado (Italia);

139.59 Remediar las malas condiciones materiales de los lugares de reclusión (Ucrania);

139.60 Intensificar la labor encaminada a aplicar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y atender sin demora las quejas sobre el hacinamiento y las malas condiciones en los lugares de reclusión, incluidos los centros de prisión preventiva (Costa Rica);

139.61 Seguir adoptando medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de las instituciones judiciales y el sistema penitenciario (Federación de Rusia);

139.62 Adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para garantizar un poder judicial independiente (Suecia);

139.63 Acelerar la creación de centros de asistencia jurídica a nivel de distrito (Timor-Leste);

- 139.64 Seguir intensificando las actividades en la aplicación de leyes y políticas sobre la libertad de expresión y de reunión (Ghana);
- 139.65 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y limpias en 2023, entre otras formas facilitando el acceso de los votantes a la documentación de identidad y a la inscripción electoral (Australia);
- 139.66 Intensificar las gestiones para fortalecer las medidas de política para luchar contra la trata de personas, en consonancia con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y mejorar la disponibilidad de los servicios de apoyo a las víctimas (Filipinas);
- 139.67 Continuar sus actividades encaminadas a detectar y proteger a las víctimas de la trata (Estado de Palestina);
- 139.68 Intensificar las gestiones para detectar y proteger a las víctimas de la trata de personas desde y dentro del país, así como para investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los autores (Armenia);
- 139.69 Intensificar aún más las gestiones para combatir la trata de personas, entre otras formas mejorando las prácticas de imposición del cumplimiento de la ley con miras a lograr a que los autores comparezcan ante la justicia y sean castigados, así como brindando a las víctimas de la trata protección y rehabilitación (Belarús);
- 139.70 Modificar la Ley contra la Trata de Personas para incorporar una definición de trata de personas que se ajuste a las disposiciones del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Chad);
- 139.71 Fortalecer las políticas de apoyo a la familia como unidad fundamental y natural de la sociedad (Egipto);
- 139.72 Intensificar las gestiones encaminadas a aumentar las oportunidades de participación igualitaria de las mujeres en la fuerza de trabajo (Sri Lanka);
- 139.73 Intensificar las gestiones encaminadas a hacer frente a la fragilidad resultante de los problemas de seguridad alimentaria, especialmente en el contexto del cambio climático (Irak);
- 139.74 Intensificar sus actividades para garantizar el acceso a la alimentación, a servicios de salud de calidad y a la educación, especialmente para los grupos vulnerables, como las personas mayores, los niños, los enfermos crónicos y las personas con discapacidad, tanto en el contexto de la respuesta a la COVID-19 como más allá de esta (Tailandia);
- 139.75 Seguir adoptando medidas de productividad agrícola para garantizar la seguridad alimentaria en el país (Argelia);
- 139.76 Seguir adoptando medidas para salvaguardar la seguridad alimentaria (China);
- 139.77 Garantizar la aplicación de la política de seguridad alimentaria y nutricional de 2013 (Côte d'Ivoire);
- 139.78 Proseguir las actividades realizadas para combatir la pobreza y promover los servicios de educación, salud, vivienda y agua y saneamiento, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Túnez);
- 139.79 Seguir consolidando sus encomiables programas sociales en favor de su población (República Bolivariana de Venezuela);

- 139.80 Adoptar nuevas medidas para mejorar el nivel de bienestar y protección social de la población (Belarús);
- 139.81 Incrementar las actividades encaminadas a proporcionar acceso al agua potable salubre y al saneamiento (Irak);
- 139.82 Mejorar el acceso al agua potable y a instalaciones de saneamiento adecuadas (Côte d'Ivoire);
- 139.83 Fortalecer las gestiones para ampliar el acceso de sus ciudadanos a la atención de la salud, incluso en el manejo de la pandemia, con la posible cooperación bilateral e internacional (Indonesia);
- 139.84 Intensificar las actividades para mejorar el acceso a los establecimientos de salud y la asistencia médica a fin de mejorar la tasa de mortalidad general (Malasia);
- 139.85 Fortalecer el sector de la salud mejorando la calidad de la atención mediante mejores condiciones de trabajo para los trabajadores sanitarios, y garantizar el acceso de la población a la atención médica necesaria (Mauritania);
- 139.86 Mejorar el acceso a servicios sanitarios de calidad y asequibles, incluso en zonas remotas, asignando recursos presupuestarios suficientes a la sanidad, que permitan la creación de hospitales con profesionales sanitarios cualificados y formados en derechos humanos (Portugal);
- 139.87 Adoptar medidas adecuadas para mejorar la cobertura y la accesibilidad de los servicios sanitarios (Sri Lanka);
- 139.88 Garantizar el acceso a la atención y la asistencia sanitaria, en particular a los grupos vulnerables, entre otras formas aumentando la asignación presupuestaria para el sector de la salud (Brasil);
- 139.89 Garantizar a las mujeres que viven en zonas rurales y remotas el acceso a los servicios sanitarios y sociales, especialmente en materia de planificación familiar (Côte d'Ivoire);
- 139.90 Seguir creando un entorno propicio para la mejora de la salud pública a través de la Estrategia Nacional de Salud para Zimbabwe (2016-2020) y una sólida estrategia de respuesta al VIH (República Popular Democrática de Corea);
- 139.91 Seguir fortaleciendo el acceso de los niños a los servicios de salud, especialmente en lo que respecta al VIH, la malaria y la tuberculosis (Argelia);
- 139.92 Seguir priorizando las políticas de salud pública, especialmente en la atención primaria y de salud de la comunidad, a fin de mantener el descenso de las tasas de mortalidad en todos los grupos de edad, especialmente los niños, adolescentes y jóvenes (Cuba);
- 139.93 Continuar sus gestiones para mejorar el acceso de toda su población a los servicios de atención de la salud, y fortalecer la respuesta del Gobierno a la pandemia de COVID-19 (República Islámica del Irán);
- 139.94 Seguir mejorando los servicios de atención de la salud a fin de responder mejor a los retos que plantea la pandemia de COVID-19, en particular las necesidades de los más vulnerables (Mozambique);
- 139.95 Reforzar las medidas para mitigar los problemas relacionados con la COVID-19, sirviéndose del apoyo de la comunidad internacional (Bangladesh);
- 139.96 Seguir mejorando los derechos de las mujeres y las niñas, garantizando el acceso a la salud y a la información sobre el VIH y los derechos reproductivos (Eswatini);
- 139.97 Proseguir las medidas para reformar y desarrollar el sector de la educación, a fin de incluir a todos los grupos de la sociedad, entre ellos las personas con necesidades especiales (Libia);

- 139.98 Adoptar medidas para mejorar el acceso a la educación durante el período de la pandemia, entre otras formas impartiendo capacitación a maestros y profesores en el uso de plataformas de aprendizaje electrónico (Malasia);
- 139.99 Adoptar medidas urgentes para garantizar que todos los niños, incluidos los que viven en zonas remotas, tengan acceso a la educación, y eliminar todas las causas profundas de discriminación contra las niñas en el ejercicio efectivo de su derecho a la educación (Portugal);
- 139.100 Intensificar sus gestiones para garantizar la plena aplicación de la Ley de 2020 por la que se modifica la Ley de Educación, y reducir la tasa de deserción escolar, especialmente entre las niñas (Estado de Palestina);
- 139.101 Seguir prestando especial atención a la cuestión de la educación, y garantizar a todos una educación accesible y de calidad (República Popular Democrática de Corea);
- 139.102 Seguir asignando recursos a programas que promuevan los derechos de la mujer (Filipinas);
- 139.103 Proteger los medios de subsistencia de las mujeres rurales y apoyar a las agricultoras con incentivos, acceso al crédito y otras fuentes productivas (Serbia);
- 139.104 Seguir fortaleciendo sus políticas y medidas para empoderar a las mujeres y las niñas (Argelia);
- 139.105 Intensificar las medidas que se están adoptando para promover los derechos de la mujer, entre otras formas mediante campañas de sensibilización (Azerbaiyán);
- 139.106 Intensificar las gestiones encaminadas al empoderamiento económico de las mujeres rurales, garantizando al mismo tiempo el acceso a la electricidad, el agua y el saneamiento (Chipre);
- 139.107 Reforzar las medidas legislativas y administrativas para garantizar el acceso de las mujeres a vías de participación económica, como la tierra y la financiación (Botswana);
- 139.108 Proseguir las medidas encaminadas a luchar contra la violencia de género y la discriminación (India);
- 139.109 Adoptar todas las medidas necesarias, tanto en la legislación como en la práctica, para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, así como el matrimonio infantil, precoz y forzado, las pruebas de virginidad y otras prácticas nocivas (Letonia);
- 139.110 Considerar la posibilidad de fortalecer las medidas de política en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia de género (Filipinas);
- 139.111 Adoptar nuevas medidas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas (Portugal);
- 139.112 Proseguir sus gestiones encaminadas a combatir la violencia de género, y llevar a cabo campañas de sensibilización basadas en la comunidad (Georgia);
- 139.113 Aplicar medidas eficaces para promover la denuncia de la violencia doméstica y exigir rendición de cuentas a los autores (Botswana);
- 139.114 Movilizar esfuerzos en materia de provisión de recursos y mejora de las infraestructuras para los niños de las zonas rurales (Sri Lanka);
- 139.115 Adoptar nuevas medidas para garantizar una protección equitativa de los niños en todo el país, fortaleciendo y aplicando sistemas de protección de la infancia (Georgia);
- 139.116 Garantizar la adopción de medidas legislativas y de política para tipificar como delito el matrimonio infantil y castigar a sus autores (India);

- 139.117 Tipificar como delito el matrimonio infantil y enjuiciar y castigar a los responsables de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos (Luxemburgo);
- 139.118 Tipificar como delito el matrimonio infantil y enjuiciar y castigar adecuadamente a los autores (Eslovenia);
- 139.119 Fortalecer las medidas de protección de los derechos de las mujeres y las niñas y contra la práctica ilegal del matrimonio infantil (Francia);
- 139.120 Proseguir sus gestiones para poner fin al matrimonio infantil (Viet Nam);
- 139.121 Tipificar como delito el matrimonio infantil y enjuiciar y castigar adecuadamente a los autores (Zambia);
- 139.122 Adoptar medidas pragmáticas para luchar contra el matrimonio precoz y forzado (Angola);
- 139.123 Esforzarse más en la lucha contra el matrimonio precoz adoptando una legislación firme (Cabo Verde);
- 139.124 Eliminar el matrimonio infantil (Costa Rica);
- 139.125 Adoptar medidas adicionales para prohibir el matrimonio precoz (Chipre);
- 139.126 Garantizar a las personas que viven en zonas rurales el acceso a la inscripción de los nacimientos y la obtención de partidas de nacimiento (Eswatini);
- 139.127 Proporcionar a todos sus ciudadanos partidas de nacimiento y documentos nacionales de identidad a fin de garantizar el acceso a la educación, los servicios públicos y el censo electoral (Canadá).
140. Zimbabwe examinará las recomendaciones que figuran a continuación y les dará respuesta a su debido tiempo, pero a más tardar en el 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos:
- 140.1 Seguir adoptando medidas encaminadas a la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos pendientes (Malawi);
- 140.2 Ratificar los tratados, convenciones y acuerdos pendientes (Nigeria);
- 140.3 Ratificar todos los tratados fundamentales de derechos humanos a fin de salvaguardar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales (Noruega);
- 140.4 Ratificar las convenciones internacionales de derechos humanos pendientes (Costa Rica);
- 140.5 Considerar la posibilidad de ratificar los instrumentos internacionales en los que Zimbabwe todavía no es parte, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Djibouti);
- 140.6 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Japón);
- 140.7 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Sierra Leona);
- 140.8 Ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (México);

- 140.9 Adherirse al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Togo);
- 140.10 Ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Montenegro);
- 140.11 Considerar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Argentina);
- 140.12 Intensificar las gestiones encaminadas a ratificar la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (Níger);
- 140.13 Acelerar el proceso de ratificación de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, que aún está en estudio (Sudán del Sur);
- 140.14 Finalizar la ratificación de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (República Democrática del Congo);
- 140.15 Ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (Dinamarca);
- 140.16 Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Sierra Leona);
- 140.17 Ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (Malí);
- 140.18 Considerar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Senegal);
- 140.19 Intensificar las gestiones encaminadas a ratificar los instrumentos internacionales que no hayan sido ratificados aún, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo (Ghana);
- 140.20 Considerar la posibilidad de ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Indonesia);
- 140.21 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Iraq);
- 140.22 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Kenya);
- 140.23 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Letonia);
- 140.24 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Maldivas);
- 140.25 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes e intensificar la labor de lucha contra la tortura aplicando una política de tolerancia cero (Islas Marshall);
- 140.26 Considerar la posibilidad de ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Mauricio);
- 140.27 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Namibia);
- 140.28 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Fiji);

- 140.29 Ratificar sin reservas la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo (España);
- 140.30 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo (Finlandia);
- 140.31 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Francia);
- 140.32 Considerar la posibilidad de ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Armenia);
- 140.33 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Burkina Faso);
- 140.34 Considerar la posibilidad de ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Chile);
- 140.35 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo (Chipre);
- 140.36 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Alemania);
- 140.37 Adoptar medidas conducentes a la ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo, como se recomendó anteriormente (Chequia);
- 140.38 Ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Dinamarca);
- 140.39 Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Namibia);
- 140.40 Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Eslovenia);
- 140.41 Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, e incorporarlo en el ordenamiento jurídico interno (Argentina);
- 140.42 Adoptar las medidas adecuadas para combatir el sexismo y la violencia sexual, ratificando el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cabo Verde);
- 140.43 Considerar la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Chile);
- 140.44 Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Côte d'Ivoire);
- 140.45 Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Dinamarca);
- 140.46 Considerar la posibilidad de cursar una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos (Letonia);
- 140.47 Armonizar con la Constitución la edad de consentimiento para contraer matrimonio prevista en la Ley de Matrimonios Consuetudinarios y en la Ley de Matrimonio (Canadá);
- 140.48 Velar por que las leyes que rigen el derecho a la libertad de reunión pacífica estén en plena consonancia con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Montenegro);

- 140.49 Proseguir las gestiones encaminadas a incorporar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Níger);
- 140.50 Adoptar leyes acordes con la Constitución de 2013 y el sistema internacional de derechos humanos, que garanticen el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación (España);
- 140.51 Adoptar una ley específica de igualdad de género que contemple todos los motivos de discriminación contra las mujeres (Chequia);
- 140.52 Finalizar la aprobación de la ley de la comisión independiente de denuncias de Zimbabwe, que creará un mecanismo independiente para el examen de las denuncias de los ciudadanos relativas a la actuación de los servicios de seguridad (República Democrática del Congo);
- 140.53 Garantizar la independencia de la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe y establecer un procedimiento claro, transparente y participativo para la selección y el nombramiento de sus miembros (Luxemburgo);
- 140.54 Crear una institución nacional de derechos humanos de conformidad con los Principios de París (Senegal);
- 140.55 Garantizar la armonización de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe con los Principios de París y con la Constitución de Zimbabwe, y proporcionar fondos para la protección y promoción de los derechos humanos (Sudáfrica);
- 140.56 Crear una institución nacional de derechos humanos con facultades, mecanismos y medios de funcionamiento que garanticen su independencia y eficacia (Togo);
- 140.57 Adoptar una estrategia nacional para eliminar la discriminación por razón de género y aumentar la paridad de género en los ámbitos político, económico y social (Angola);
- 140.58 Proteger a los menores intersexuales de cirugías no consentidas y de violaciones de la integridad corporal (Islandia);
- 140.59 Abolir la pena de muerte, conmutar las penas de muerte existentes por penas proporcionadas y ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Islandia);
- 140.60 Introducir una moratoria *de iure* de las ejecuciones con miras a la abolición total de la pena de muerte y ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Italia);
- 140.61 Establecer una moratoria de la pena capital con miras a su futura abolición, y considerar la posibilidad de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Letonia);
- 140.62 Proseguir las gestiones encaminadas a la abolición de la pena de muerte (Islas Marshall);
- 140.63 Abolir la pena de muerte en todas las circunstancias y ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Noruega);
- 140.64 Abolir la pena de muerte y ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Portugal);
- 140.65 Considerar la posibilidad de modificar la Constitución para abolir la pena de muerte para todos los delitos (Sierra Leona);

- 140.66 Establecer una moratoria oficial sobre la aplicación de la pena de muerte y avanzar hacia su abolición legal para todos los delitos (España);
- 140.67 Abolir la pena de muerte y ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Finlandia);
- 140.68 Adoptar todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte para todos los delitos, así como para conmutar todas las penas de muerte por penas alternativas (Suiza);
- 140.69 Fortalecer las campañas de sensibilización sobre la pena de muerte y los debates públicos sobre la cuestión desde una perspectiva de derechos humanos, incluso en el Parlamento, con miras a abolirla y a ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, lo antes posible (Uruguay);
- 140.70 Imponer una moratoria oficial sobre la pena de muerte con efecto inmediato, conmutar todas las penas de muerte existentes por penas de prisión y abolir la pena de muerte en la legislación nacional (Australia);
- 140.71 Establecer una moratoria de la pena de muerte con miras a su abolición (Costa Rica);
- 140.72 Establecer una moratoria oficial de las ejecuciones (Chipre);
- 140.73 Adherirse a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro para el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión (Italia);
- 140.74 Aplicar plenamente las recomendaciones del informe de la comisión de investigación Motlanthe (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
- 140.75 Aplicar las recomendaciones de la comisión Motlanthe sobre la violencia desatada después de las elecciones de 2018, para ofrecer reparación a las víctimas (Canadá);
- 140.76 Permitir a todas las personas la práctica de las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación garantizadas por la Constitución (Estados Unidos de América);
- 140.77 Garantizar que las restricciones y medidas de confinamiento sean proporcionadas, necesarias y limitadas en el tiempo, y se apliquen sin intimidar a los ciudadanos y al personal de los medios de comunicación (Chequia);
- 140.78 Garantizar que la sociedad civil, los periodistas y los defensores de los derechos humanos puedan expresarse libremente y presentar denuncias sin temor al acoso, la intimidación o las represalias de las autoridades (Costa Rica);
- 140.79 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos (España);
- 140.80 Adoptar medidas para garantizar que los periodistas y los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor en un entorno propicio, sin temor a ser víctimas de actos de intimidación o represalias (Uruguay);
- 140.81 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los agentes de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos puedan actuar libremente sin miedo a la intimidación o a las represalias (Australia);
- 140.82 Proteger a los agentes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, contra todo tipo de acoso o persecución, y mejorar el marco jurídico de modo que fomente y facilite el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, como se recomendó anteriormente (Chequia);

140.83 Garantizar que toda modificación de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas permita a la sociedad civil operar de forma independiente (Irlanda);

140.84 Modificar las leyes vigentes que regulan las organizaciones de la sociedad civil, como la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas, a fin de garantizar la protección del espacio cívico y de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación (Canadá);

140.85 Facilitar la celebración de elecciones libres, limpias y transparentes en 2023 y en adelante mediante la realización de reformas políticas y electorales sustantivas y concretas, que incluyan la aplicación de las recomendaciones emitidas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el informe sobre su misión a Zimbabwe en 2018 (Suecia);

140.86 Garantizar a los menores de 18 años el derecho a recibir información, educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva (Islandia);

140.87 Garantizar que todas las escuelas tengan acceso a Internet (Eswatini);

140.88 Adoptar medidas para garantizar a las niñas y los niños 12 años de educación primaria y secundaria gratuita, como recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Mauricio);

140.89 Intensificar sus gestiones para mejorar el acceso de las mujeres y niñas en situación de riesgo de enfermarse a los programas de prevención y detección precoz (Tailandia);

140.90 Intensificar las medidas para combatir la violencia contra las mujeres, los niños y todas las personas por razón de su orientación sexual e identidad de género (Fiji);

140.91 Ampliar la definición de autores de actos de violencia doméstica en la Ley de Violencia Doméstica de modo que queden incluidos los que no están necesariamente emparentados con la víctima o que no viven en el mismo hogar que ella, y entablar un diálogo con las comunidades al respecto (Chad);

140.92 Abolir los castigos corporales en todos los ámbitos y fortalecer los sistemas de protección de la infancia, en pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Eslovenia);

140.93 Elaborar un plan gubernamental para eliminar el matrimonio infantil y modificar las disposiciones de la Ley de Matrimonio que lo permiten (Islas Marshall);

140.94 Considerar la posibilidad de modificar las disposiciones de la Ley de Matrimonio que permiten el matrimonio infantil, en consonancia con la decisión del Tribunal Constitucional (Sierra Leona);

140.95 Modificar todas las leyes complementarias que puedan tener una relación directa con las disposiciones que prohíben el matrimonio infantil, a fin de garantizar la coherencia y la armonía del marco jurídico (Bélgica);

140.96 Establecer centros de inscripción de los nacimientos en todos los hospitales de distrito del país (Kenya);

140.97 Seguir adoptando medidas para facilitar la inscripción de todos los nacimientos y aumentar la tasa de expedición de partidas de nacimiento (Turquía);

140.98 Adoptar medidas específicas adicionales para garantizar la aplicación efectiva del derecho a la nacionalidad de los niños apátridas nacidos en Zimbabwe y asegurar su inclusión en la sociedad (Angola).

141. Las recomendaciones que figuran a continuación han sido examinadas por Zimbabwe y se ha tomado nota de ellas:

141.1 Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y adaptar plenamente la legislación nacional a todas las obligaciones contempladas en dicho Estatuto (Letonia);

141.2 Cursar una invitación abierta a los titulares de mandatos de los procedimientos especiales (Costa Rica);

141.3 Conceder acceso sin trabas al país a todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales que soliciten una visita, como se recomendó anteriormente (Chequia);

141.4 Adoptar leyes que garanticen que el derecho de voto se extienda a todos los ciudadanos, incluidos los encarcelados y los que se encuentran en la diáspora, y aplicar las recomendaciones de las misiones de observación de las elecciones armonizadas de 2018, incluida la comisión de investigación Motlanthe (Noruega);

141.5 Adoptar las medidas necesarias para eliminar las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad, contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales y contra las personas intersexuales (Chile);

141.6 Eliminar toda medida discriminatoria contra las mujeres, la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual y las personas con discapacidad, y garantizar y mejorar el acceso de estos grupos a la justicia (Costa Rica);

141.7 Despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, derogando el artículo 73 del Código Penal y la Ley de 2006 de Reforma de este (Islandia);

141.8 Despenalizar las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo y luchar contra todas las formas de discriminación y de violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género (Italia);

141.9 Derogar todas las disposiciones legales que discriminan a las personas por su orientación sexual e identidad de género, en particular la penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo (México);

141.10 Despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y adoptar las medidas necesarias para combatir la discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (España);

141.11 Reafirmar su adhesión a los principios de igualdad y no discriminación, entre otras formas despenalizando rápidamente las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo (Uruguay);

141.12 Avanzar en las medidas legislativas necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ (Argentina);

141.13 Derogar todas las leyes y políticas que discriminen a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, y modificar las leyes para garantizar la salvaguarda de sus derechos y libertades (Australia);

141.14 Adoptar medidas para avanzar en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas por su orientación sexual e identidad de género (Alemania);

141.15 Aplicar las leyes de seguridad y de garantías procesales aprobadas en virtud de la Constitución de 2013, que prohíben las detenciones arbitrarias y las privaciones de libertad prolongadas (Estados Unidos de América);

- 141.16 Erradicar las prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la poligamia (Ucrania);
- 141.17 Remediar el hacinamiento y las malas condiciones materiales en los lugares de reclusión y separar a los menores de los adultos (Zambia);
- 141.18 Elaborar una reforma profunda del sistema judicial y garantizar efectivamente la independencia del poder judicial (Ucrania);
- 141.19 Respetar y garantizar la separación de poderes para asegurar la independencia judicial y la imparcialidad en la toma de decisiones, y respetar y garantizar procesos independientes y transparentes para el nombramiento y la destitución de los jueces así como para la prórroga de su permanencia en el cargo (Estados Unidos de América);
- 141.20 Garantizar la imparcialidad de los tribunales de Zimbabwe, velando por que se respeten los derechos constitucionales de las personas que comparecen ante ellos a un juicio imparcial y a un abogado de su elección (Bélgica);
- 141.21 Aplicar plenamente las recomendaciones de las misiones independientes locales, regionales e internacionales de observación de las elecciones de 2018, a fin de promover unas elecciones pacíficas, libres, limpias y dignas de crédito en 2023 (Países Bajos);
- 141.22 Adoptar medidas rápidas para poner fin a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, entre otras formas supervisando el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la comisión Motlanthe sobre la cuestión de la responsabilidad individual (Suecia);
- 141.23 Adoptar medidas concretas para facilitar la búsqueda de un proceso inclusivo que asegure la justicia, la verdad, las garantías de no repetición y la reconciliación para toda la población (Suiza);
- 141.24 Aplicar plenamente las recomendaciones de los informes de 2018 de los observadores electorales (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
- 141.25 Garantizar que las denuncias de abusos contra los derechos humanos se investiguen de forma rápida y transparente y que se exija rendición de cuentas a los autores (Australia);
- 141.26 Investigar los casos de uso desproporcionado de la violencia por parte de la policía y exigir responsabilidades a los autores (Chipre);
- 141.27 Acabar con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones de la comisión Motlanthe sobre la cuestión de la responsabilidad individual (Alemania);
- 141.28 Establecer un sistema de denuncias independiente —como prevé la Constitución— para recibir e investigar las denuncias de los ciudadanos contra los servicios de seguridad (Islas Marshall);
- 141.29 Establecer un mecanismo de denuncia independiente para investigar las violaciones y los abusos y exigir rendición de cuentas a los miembros de las fuerzas de seguridad que presuntamente los hayan cometido (Estados Unidos de América);
- 141.30 Garantizar un entorno propicio para el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular adoptando leyes que protejan a los defensores de los derechos humanos y luchando contra la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (Francia);
- 141.31 Respetar el derecho a la libertad de expresión y de reunión y poner fin a las detenciones arbitrarias y al enjuiciamiento de periodistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas estudiantiles, candidatos de la oposición y otras personas (Noruega);

141.32 Modificar la Ley de Libertad de Información y la Ley de Mantenimiento de la Paz y el Orden de modo que se elimine cualquier disposición que restrinja indebidamente las libertades (Bélgica);

141.33 Armonizar la Ley de Mantenimiento de la Paz y el Orden con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, de modo que se respeten los derechos a la libertad de expresión y de reunión y asociación de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las comunidades religiosas (Brasil);

141.34 Modificar la Ley de Mantenimiento de la Paz y el Orden de modo que se permita el pleno disfrute del derecho a la libertad de reunión pacífica (Irlanda);

141.35 Modificar la Ley de Mantenimiento de la Paz y el Orden, de 2019, en consulta con la sociedad civil, reconocer la legitimidad de las reuniones y manifestaciones pacíficas espontáneas y elaborar protocolos de imposición del cumplimiento de la ley en la gestión de las manifestaciones que sean compatibles con las normas internacionales de derechos humanos (Luxemburgo);

141.36 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y asegurar que la Ley de Mantenimiento de la Paz y el Orden se ajuste a las normas internacionales (México);

141.37 Proteger y fortalecer el espacio cívico en la ley y en la práctica, entre otras formas anulando las modificaciones previstas de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas y la propuesta de promulgación del “proyecto de ley patriótica” (Países Bajos);

141.38 Modificar la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas tras realizar consultas con todos los sectores para garantizar el derecho a la libertad de asociación, y establecer un organismo regulador independiente que sea eficaz y representativo de las organizaciones voluntarias privadas que operan en el país (Noruega);

141.39 Garantizar 12 años de educación primaria y secundaria gratuita (Luxemburgo).

142. Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe reflejan la posición de los Estados que las presentaron y/o del Estado examinado. No debe interpretarse que han recibido el respaldo del Grupo de Trabajo en su conjunto.

Annex

Composition of the delegation

The delegation of the Republic of Zimbabwe was headed by Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Honourable Ziyambi Ziyambi, and composed of the following members:

- Mrs. Virginia Mabiza; Secretary for Justice, Legal and Parliamentary Affairs;
 - H.E. Stuart H. Comberbach; Ambassador/Permanent Representative of Zimbabwe to the United Nations Office in Geneva;
 - Mrs. Fortune Chimbaru; Deputy Attorney General (Civil Division);
 - Mr. Tapiwa F. Godzi; Chief Director; Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs;
 - Mr Pearson T. Chigiji; Deputy Permanent Representative of Zimbabwe to the United Nations Office in Geneva;
 - Mr Charles Chishiri; Minister Counsellor – Zimbabwe Permanent; Mission to the United Nations Office in Geneva;
 - Mr. Tabani Mpofu; Chairperson Special Anti-Corruption Unit;
 - Mrs. Tapiwa S.D. Chiwenga; Acting Director; Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs;
 - Mr. Kingston Magaya; Director Legal, Ministry of Transport and Infrastructural Development;
 - Mr. Kanganwiso A. Chaipa; Economist; Office of the President and Cabinet;
 - Ms. Joyce T. Shumba; Chief Law Officer; Attorney General’s Office;
 - Mr. Lloyd Kabara; Law Officer; Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs;
 - Mr. Farai Chingwere; Acting Deputy Director; Ministry of Finance and Economic Development;
 - Mr. Musindo C. Mandava; Principal Legal Officer; Ministry of Foreign Affairs and International Trade.
-